

Los Ángeles, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Que se presentaron los abogados Claudio Garrido Coloma y Hugo Vásquez Ibáñez, domiciliados en calle El Roble N°480, oficina N°2, comuna de Chillán, en representación del trabajador Rodolfo Eduardo Manríquez Arroyo, cesante, domiciliado en calle Las Murtillas N° 723, Villa Lomas de Santa María, comuna de Los Ángeles y dedujeron demanda por despido improcedente, en contra de Santander Gestión de Recaudación y Cobranzas Limitada, sociedad del giro de cobranzas y servicios, representada legalmente de conformidad al artículo 4° del Código del Trabajo por don Jorge Peña Collao y solidariamente o subsidiariamente, según corresponda, en contra de Banco Santander Chile, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente de conformidad al artículo 4° del Código del Trabajo por don Jorge Peña Collao, ignoran profesión u oficio, todos domiciliados en calle Bandera N° 140, comuna de Santiago, en base a los siguientes fundamentos de hecho y derecho: Que don Rodolfo Manríquez Arroyo fue contratado con fecha 11 de enero de 2007 por la demandada principal, para cumplir las funciones de cobrador terreno, en la sucursal del Banco Santander de la ciudad de San Fernando, su contrato era de duración indefinida y el promedio de sus últimos 3 meses de remuneraciones, la suma de \$1.875.520 pesos. Que el día 26 de abril de 2021, se le comunicó el término de su contrato de trabajo, a contar de ese mismo día, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 161, inciso primero del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, señalándose textualmente en la carta “Actualmente Santander Gestión de Recaudación y Cobranzas Limitada, se encuentra en un proceso de reestructuración, racionalización, eficiencia y modernización del negocio, acorde a los nuevos tiempos y avances tecnológicos. Con motivo del proceso antes mencionado, y con el objeto de optimizar y hacer más eficientes los diferentes procedimientos al interior de la Empresa especialmente aquellos relacionados con la gestión de Cobranza, especialmente referida a la cobranza en terreno de productos bancarios a la cual usted pertenece en virtud de su cargo como Cobrador Terreno es que su empleador se ha visto en obligación de poner término a su contrato de trabajo. En este escenario, se hace necesario propender a la externalización del modelo de cobranza, estableciendo canales de recobro externo”. El finiquito fue firmado con fecha 12 de mayo de 2021, recibiendo el trabajador las siguientes cantidades: \$25.211.830 a título de indemnización por años servicios, \$1.800.845 a título de indemnización sustitutiva del aviso previo y \$ 387.793 por concepto de feriado legal. Además se le efectuó un descuento de \$6.663.610 pesos por concepto de aporte a la administradora de fondos de cesantía.



Alega el trabajador que el despido es improcedente ya que la causal aducida es de carácter objetivo relativa a hechos que impongan forzosamente el despido, que además debe revestir cierta gravedad, que debe existir relación de causalidad entre la causal y el despido, y finalmente todo explicitarse de manera detallada en la carta de despido, lo que no ha ocurrido en la especie ya que no hay una real causal de necesidades de la empresa.

Por otro lado, alega que el descuento efectuado en el finiquito como aporte al seguro de cesantía, opera cuando el contrato terminare efectivamente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo y en el caso al declararse la improcedencia de la causal de despido invocada, necesariamente habría que estimar improcedente el descuento efectuado a la AFC, supuestamente hecho al amparo del artículo 13 de la Ley 19.728.

En otra arista, la demanda cuestiona la base de cálculo considerada por el empleador al momento de calcular las indemnizaciones recibidas al momento del finiquito, por cuanto el artículo 172 del Código del Trabajo, considera como última remuneración toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios y, en el caso de los trabajadores que perciben remuneraciones variables el promedio de lo percibido en los últimos tres meses calendario. De tal forma que las últimas remuneraciones que deben considerarse en el caso de autos, corresponden a los meses de febrero, marzo y abril de 2021, cuyo promedio es \$1.875.520 y consecuentemente existirían diferencias a favor del trabajador.

En cuanto a la existencia de subcontratación, señala que la demandada principal prestaba sus servicios a Banco Santander Chile en tareas que deberían ser propias de la organización, colaborando en la obtención de los fines de ésta y atendido que los servicios que desempeñaba eran para una tercera persona, denominada para estos efectos, empresa principal, ésta se hace solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que tiene la contratista con sus trabajadores.

Que la demandada principal contestó la demanda señalando que fue efectivo que el demandante mantuvo una relación laboral como cobrador en terreno con su entidad jurídica desde el día 11 de enero de 2007 al 26 de abril de 2021, fecha en la cual fue despedido por la causal necesidades de la empresa. Que fue efectivo que se descontó \$6.663.610 a la indemnización por años de servicio.

De otro lado afirma que el despido se ajustó a derecho en las formas de la comunicación y en cuanto a los hechos, ya que el demandante fue despedido como consecuencia de un proceso de reorganización de la unidad en la cual prestaba sus servicios, pues es evidente el cambio que ha existido en el negocio



de la cobranza bancaria, en razón de las nuevas tecnologías, cambios en el mercado, estallido social y pandemia del Covid-19; factores que han redundado en que ya no se requiera de cobranza en terreno, pues hoy todo se hace mediante la modalidad del teletrabajo o por medio de medios electrónicos. Además, hace presente el aumento de las restricciones legales a la cobranza extrajudicial, pues año a año se dictan leyes que la limitan, lo que ha hecho necesaria una reducción en los puestos de trabajo de “Cobrador Terreno”.

De otro lado, la demandada impugna la base de cálculo utilizada por el actor en su demanda, para el cálculo de las diferencias indemnizatorias que alega le corresponden, ya que no es efectivo que la última remuneración mensual percibida por el demandante para los fines del artículo 172 del Código del Trabajo haya ascendido a la suma de \$1.875.520, sino a la suma de \$1.800.845. Impugna, además, que se deba el incremento legal del 30% a la indemnización por años de servicio, o en su defecto, arguye que si ella fuese declarada procedente, debería calcularse sobre la base de la indemnización legal y no sobre la efectivamente pagada, que obedece a un mayor beneficio pactado en los respectivos convenios colectivos con los Sindicatos de la empresa; al respecto, señala que la indemnización por años de servicio sin topes, no se consideraría para efectos de recargos. A mayor abundamiento, el trabajador y la empresa acordaron en el respectivo convenio colectivo vigente entre ellos en la cláusula décima letra A, que a los trabajadores que llevaran más de un año prestando servicios y fuesen desvinculados por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, se les enteraría una indemnización por años de servicio equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada, sin topes legales, por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, que hubieren trabajado en forma continua para su representada y/o sus antecesores, reconocido en su contrato de trabajo. Sin embargo, dicha cláusula agrega que, en el evento de que los tribunales de justicia declaren que la causal del artículo 161 del Código del Trabajo es injustificada, el incremento legal del 30% no se aplicará sobre la indemnización por años de servicio señalada anteriormente, sino que sobre la indemnización por años de servicio legal aplicándose en consecuencia para estos efectos los topes legales de monto (90 UF) y de tiempo (330 días).

Por su parte, la demandada principal alega la improcedencia del reclamo por diferencias en el pago de la indemnización por años de servicios, indemnización sustitutiva del aviso previo y en el pago del feriado legal y/o proporcional, acusando que el demandante ha abultado artificialmente su base de cálculo para los fines del artículo 172 del Código del Trabajo, de lo cual surgirían las supuestas diferencias en el pago de la indemnización por años de servicios e indemnización sustituitiva del aviso previo, como también diferencias en el pago del feriado legal y/o proporcional. Pero al ser la correcta base de cálculo, nada se adeuda por estos conceptos ni por concepto de devolución del descuento



efectuado por imputación al fondo de cesantía, ya que el artículo 13 de la Ley N°19.728 establece la procedencia de descontar de la indemnización por años de servicio, o imputar al pago de esta, la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad, cuando el contrato termina por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo.

En base a todo lo anterior, pide el rechazo de la demanda en todas sus partes con costas, o bien que se exima a su parte de las mismas al haber tenido motivo plausible para litigar.

Que la demandada subsidiaria Banco Santander, contestó la demanda señalando que niega expresamente la relación de subcontratación con el demandante, que desconoce total y absolutamente que haya prestado servicios en régimen de subcontratación y que ambas empresas no se vinculan ni tienen relación contractual de carácter civil o comercial. Así, opone la excepción de falta de legitimación pasiva dado que el demandante jamás se desempeñó en sus faenas o dependencias y nunca prestó servicios en régimen de subcontratación para ella, así no se cumpliría en la especie con los requisitos del trabajo en régimen de subcontratación, prescritos por el artículo 183 A del Código del Trabajo.

De otro lado, la demandada subsidiaria señala que para el improbable caso que el Tribunal estime que existe algún grado de responsabilidad como Empresa Principal respecto al demandante, esta se encuentra limitada al tiempo o período durante el cual el trabajador prestó servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal.

Que efectuado el llamado a conciliación esta no se produjo.

Que el Tribunal fijó los hechos sobre los cuales no hubo controversia y los hechos a ser probados.

Que se realizó la audiencia de juicio en la cual se procedió a recibir la prueba ofrecida por las partes y a escuchar las observaciones expuestas por las partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que se presentaron los abogados Claudio Garrido Coloma y Hugo Vásquez Ibáñez, en representación del trabajador Rodolfo Eduardo Manríquez Arroyo y dedujeron demanda por despido improcedente en contra de Santander Gestión de Recaudación y Cobranzas Limitada y de Banco Santander Chile, todos ya individualizados, a fin de obtener el pago de las siguientes prestaciones: a) \$75.675 pesos por concepto de diferencia en el pago de la



indemnización por falta de aviso previo; b) \$1.045.450, por concepto de diferencia en el pago de la indemnización por años de servicio; c) \$49.828, por concepto de diferencia en el pago de feriado legal; d) \$7.563.549 pesos por concepto de recargo del 30% a la indemnización por años de servicio; y e) \$6.663.610, por concepto de restitución del descuento indebido de aporte al seguro de cesantía. Todo ello con reajustes e intereses, y costas de la causa.

SEGUNDO: Que las demandadas contestaron la demanda deducida en su contra, solicitando el rechazo de la misma.

TERCERO: Que se establecieron como hechos de la causa, los siguientes:

- 1.- La existencia de relación laboral habida entre don Rodolfo Eduardo Manríquez Arroyo y Santander Gestión de Recaudación y Cobranzas Limitada, la cual se extendió entre el 11 de enero de 2007 y el 26 de abril del año en curso.
- 2.- Que las funciones que desempeñaba el demandante para su empleadora correspondían a cobrador de terreno.
- 3.- Que el demandante fue despedido por la causal de necesidades de la empresa, conforme dispone el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo.
- 4.- Que el demandante percibió por concepto de la indemnización por años de servicios la suma de \$25.211.830, de lo que se descontó en razón del aporte del empleador al seguro de cesantía la cantidad de \$6.663.610.

CUARTO: Que por su parte, se establecieron como hechos que debían ser objeto de prueba los siguientes:

- 1.- Justificación del despido del demandante por la causal de necesidades de la empresa en los términos reseñados en su carta de desvinculación. Antecedentes de hecho en que dicha afirmación se funda.
- 2.- Remuneración mensual del demandante para efectos del pago de las prestaciones cuyo cobro se pretende en el presente juicio.
- 3.- Prestaciones adeudadas al demandante por la demandada principal y quantum de las mismas.
- 4.- Procedencia del descuento efectuado al demandante respecto a lo percibido por la indemnización por años de servicio en razón del aporte del empleador al seguro de cesantía a la luz de lo dispuesto en los artículos 13 y 52 de la ley 19.728.
- 5.- Efectividad que el demandante don Rodolfo Eduardo Manríquez Arroyo prestaba servicios para Santander Gestión de Recaudación y Cobranzas Limitada



en un régimen de subcontratación para Banco Santander Chile. Falta de legitimación activa del Banco Santander Chile para ser emplazado en estos antecedentes.

6.- Alcance temporal y jurídico de la responsabilidad atribuida por la demandante al demandado Banco Santander Chile.

7.- Efectividad de existir un monto pactado por indemnización por años de servicios en un convenio colectivo. Hechos y circunstancias del pago de dichos emolumentos.

QUINTO: Que la parte demandada principal incorporó legalmente la siguiente prueba:

1.- Contrato de Trabajo de fecha 1 de abril de 2010 y sus respectivos anexos de fecha 1 de abril de 2010 y 1 de noviembre de 2019.

2.- Carta de despido de fecha 26 de abril de 2021.

3.- Comprobante de ingreso de carta de despido a la Inspección del Trabajo.

4.- Finiquito de contrato de trabajo de fecha 26 de abril de 2021, suscrito en el oficio de la Notaria María Antonieta Carrillo Flores y firmado por trabajador y empleador.

5. Dos certificados de aporte al seguro de cesantía del actor.

6.- Liquidaciones de remuneraciones del actor de los meses de diciembre de 2020 a mayo de 2021.

7.- Convenio Colectivo de fecha 15 de febrero de 2018 y nómina de trabajadores que forman parte del mismo.

SEXTO: Que la parte demandante se valió de la misma documental incorporada por la parte demandada principal consistente en carta de despido, finiquito y liquidaciones de remuneraciones de los meses de febrero, marzo y abril de 2021.

SEPTIMO: Que la demandada solidaria o subsidiaria no incorporó prueba alguna en los presentes autos.

OCTAVO: Que en primer término es preciso abocarse al análisis de procedencia de la causal de despido del artículo 161 del Código del Trabajo y -en su caso- determinar la base de cálculo de las indemnizaciones procedentes para verificar si existen o no diferencias a pagar a favor del demandante. En segundo término, deberá determinarse si era o no procedente descontar de la indemnización por años de servicio la cotización a la administradora de fondos de



cesantía de los aportes efectuados por el empleador a la cuenta de capitalización individual del trabajador; y finalmente, si en los pagos eventualmente procedentes cabía alguna responsabilidad al Banco Santander Chile bajo la figura de solidaridad o subsidiariedad, por prestarle servicios el trabajador en régimen de subcontratación.

NOVENO: Que en relación a la procedencia de la causal de despido consagrada en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, es necesario recordar que aquella está contemplada como una causal de término de contrato de trabajo de carácter objetivo, por lo que, para que pueda ser invocada por el empleador es menester la concurrencia de ciertos hechos o situaciones que la hagan procedente, no dependiendo de su mera voluntad. Así, dice relación con circunstancias graves o irremediables en que se encuentre el empleador, las que pueden tener su origen en motivos derivados del funcionamiento de la empresa misma, como modernización o racionalización de ella, o en circunstancias de carácter económico, como las bajas de productividad, cambio en las condiciones del mercado o de la economía, debiendo dichos problemas económicos no ser transitorios o subsanables.

DÉCIMO: Que de la lectura del documento incorporado legalmente denominado “carta de despido” de fecha 26 de abril de 2021, puede leerse que efectivamente se invocan “procesos de reestructuración, racionalización, eficiencia, y modernización del negocio, acorde a los nuevos tiempos y avances tecnológicos” que inciden en el área de cobranza en terreno de la empresa empleadora y en la cual laboraba el demandante. Sin embargo, lo que se menciona en el papel -a juicio de esta juez- no pudo ser probado en los hechos, ya que ningún medio de convicción se aportó para ilustrar al Tribunal sobre cuáles fueron las reestructuraciones, cambios y modernizaciones que supuestamente tuvieron lugar, razón por la cual se estimará que el despido del actor fue improcedente.

UNDÉCIMO: Que atendido lo razonado y habiéndose establecido que el despido del demandante fue injustificado, corresponde se le cancele el aumento equivalente al treinta por ciento a que se refiere la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo por sobre la indemnización por años de servicio.

DUODÉCIMO: Que por otra parte, el actor ha cuestionado la base de cálculo de la indemnización por años de servicio que le fue cancelada, por cuanto estima que debieron considerarse como las tres últimas remuneraciones percibidas las de los meses de febrero, marzo y abril de 2021.

DÉCIMO TERCERO: Que al respecto debe tenerse presente que el inciso segundo del artículo 172 del Código del Trabajo dispone que respecto de los trabajadores con remuneraciones variables, como es el caso de autos, las



indemnizaciones se calculan sobre la base del promedio percibido en los últimos tres meses calendario. En tanto que el inciso primero del mismo precepto reza que no deben incluirse en dicho cálculo las asignaciones familiares legales, pagos por sobretiempo y beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, tales como gratificaciones y aguinaldos de navidad.

DÉCIMO CUARTO: Que en la especie, del examen de las liquidaciones de sueldo incorporadas por la parte demandada es posible extraer que existen liquidaciones de sueldo de hasta el mes de mayo de 2021, en circunstancias que es un hecho de la causa que el actor fue desvinculado en el 26 de abril de 2021; en consecuencia, en mayo no debería existir liquidación de remuneración. Sin embargo, puede deducirse que este hecho se justifica en que la liquidación denominada “mayo” corresponde a la fracción de mes trabajada en abril, pese a que el documento no lo señala. En ese entendido, lleva la razón el demandante al señalar que las liquidaciones a considerar son aquellas que nominalmente aparecen como “febrero, marzo y abril” pero que corresponden a los periodos trabajados en enero, febrero y marzo, respectivamente.

DÉCIMO QUINTO: Que en el entendido anterior debe considerarse que la liquidación de remuneraciones del mes de febrero de 2021 contempla como ítems remuneratorios los siguientes: sueldo base \$331.461 pesos, seg vida emp \$8.048, prom vacaciones \$1.106.615, gratificación por \$129.240, ajuste gratificación legal \$21.111 y premios por \$400.000. En tanto que la liquidación de remuneraciones del mes de marzo de 2021 contempla las siguientes partidas remuneratorias: sueldo base \$331.461, bono escolar \$146.473, otros bonos \$500.000, seg vida emp \$9.324. B acuerdo \$4.700.000 / descontados \$3.290.000 a título de anticipo bono acuerdo, bon sem corrida \$157.117, gratificación \$129.240 y comisión cobranza \$707.028. Finalmente, la liquidación de remuneraciones del mes de abril de 2021, contiene los siguientes haberes: sueldo base \$331.461, bono por carga \$146.983, seg vida emp \$7.768, bon semana corrida \$170.009, gratificación por 129.240 y comisión cobranza por \$977.549.

DECIMO SEXTO: Que según lo que se dijo en el considerando décimo tercero, de las partidas antes descritas deben eliminarse de la base de cálculo las asignaciones familiares legales, los pagos por sobretiempo y todos aquellos beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, de forma tal que no se considerarán los premios mencionados en la liquidación de febrero de 2021; el bono escolar y otros bonos, mencionados en el mes de marzo de 2021; y bono por carga del mes de abril de 2021.

DECIMO SEPTIMO: Que de realizar la operación matemática de promediar las tres últimas remuneraciones del trabajador en la forma explicada anteriormente, se obtiene una cifra menor incluso que la mencionada por el demandado principal en su contestación, razón por la cual para no vulnerar el



principio de no reforma en perjuicio, sólo se ordenará el pago al actor del aumento equivalente a un treinta por ciento de la indemnización por años de servicio calculado en base a la remuneración de \$1.800.845.

DÉCIMO OCTAVO: Que las partes han discutido sobre si el recargo legal de 30% debe ser calculado en base a la indemnización legal o convencional, para lo cual conviene traer a colación la prueba documental incorporada por la parte demandada consistente en el convenio colectivo de trabajo que beneficia al demandante. Al respecto se dirá que la cláusula décima letra A) del referido convenio, reza que: “La empresa pagará a los trabajadores con una antigüedad superior a 1 (un) año y cuyo contrato de trabajo termine por decisión del empleador, es decir, por las causales establecidas en el artículo 161 del Código del Trabajo, o de la norma que lo reemplace, una indemnización por años de servicio, equivalente a 30 (treinta) días de la última remuneración mensual devengada, sin topes legales, por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, que hubieren trabajado en forma continua para la Empresa y/o sus antecesores, reconocidos en sus respectivos contratos de trabajo. Respecto de las demás causales de despido se aplicará lo establecido en el Código del Trabajo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, sólo se incluirán en la última remuneración mensual devengada los estipendios fijos que hayan recibido periódicamente en los tres últimos meses anteriores al término del contrato de trabajo, excluyéndose bajo toda circunstancia los estipendios pagados esporádicamente o en forma excepcional. Para el cálculo de las indemnizaciones pactadas en la presente cláusula, no se descontará el incremento previsional estatuido por los artículos 2 y 4 del DL 3.501, respecto de aquellos trabajadores que pudiesen ser afectados por dicha norma.

Las partes acuerdan que en el evento que los Tribunales de Justicia declararen que la causal del artículo 161 del Código del Trabajo es injustificada el incremento legal del 30% o el que lo reemplace, no se aplicará sobre la indemnización por años de servicios establecida en el párrafo primero de esta cláusula, sino que sobre la indemnización por años de servicios legal aplicándose para estos efectos los topes legales”.

DÉCIMO NOVENO: Que la demandada, conforme se logra establecer de la carta de despido y finiquito, procedió al pago de la suma de \$25.211.830 por indemnización por 14 años de servicios, cifra que se desglosa de la siguiente forma: a) indemnización legal para efecto de lo dispuesto en la cláusula Décima letra A último párrafo del instrumento colectivo \$19.809.296; y b) Diferencia para alcanzar el total establecido en la cláusula del instrumento colectivo \$5.402.534. Adicionalmente, la demandada efectuó el pago de la indemnización por mes de aviso y de feriado legal.



VIGESIMO: Que según se lee con toda claridad en la cláusula décima letra A), último párrafo, del convenio colectivo, las partes del mismo acordaron que para el caso de autos, cuando un tribunal declarase que el despido ha sido injustificado por aplicación de la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, el incremento legal del 30% se calcularía no sobre la indemnización por años de servicio convencional que se pactaba a través del mismo instrumento, sino sobre la legal que corresponde al monto señalado en la letra A del finiquito, es decir, el 30% de 19.809.296 pesos equivalente a \$5.942.789, los cuales fueron efectivamente pagados al trabajador no existiendo montos adicionales que deban ser ordenados pagar a través del presente fallo.

VIGESIMO PRIMERO: Que lo anterior, resulta absolutamente compatible con lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo en concordancia con el artículo 163 del mismo cuerpo legal, pues se ha respetado el mínimo legal y la regulación que se dieron las partes en el respectivo convenio colectivo.

VIGESIMO SEGUNDO: Que en lo relativo al descuento efectuado por la demandada principal, cabe tener presente que se funda en lo previsto en el artículo 13 de la Ley 19.728, que prescribe: “Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios prevista en el inciso segundo del artículo 163 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del referido artículo, calculada sobre la última remuneración mensual definida en el artículo 172 del mismo, con un límite máximo de trescientos treinta días de remuneración, a menos que se haya pactado, individual o colectivamente, una superior, caso en el cual se aplicará esta última.

Se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan, con cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros en la forma que señala el artículo 15.

En ningún caso se podrá tomar en cuenta el monto constituido por los aportes del trabajador, para los efectos de la imputación a que se refiere el inciso anterior”.

VIGESIMO TERCERO: Que el seguro obligatorio que consagra la Ley N° 19.728 establece un sistema de ahorro obligatorio sobre la base de cuentas individuales por cesantía compuestas por, cotizaciones mensuales del empleador, del trabajador, y la creación de un fondo de cesantía solidario. Ahora bien, conforme la norma transcrita en el considerando anterior, si el contrato de trabajo termina por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tiene derecho a la indemnización por años de servicios con descuento de



aquella parte del saldo de la cuenta individual constituida por las cotizaciones que efectuó el empleador.

VIGESIMO CUARTO: Que el empleador, en consecuencia, al invocar la causal de término de la relación laboral prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo, se encuentra autorizado legalmente para pagar la indemnización por años de servicio, sólo en la suma que resulte de la diferencia entre lo aportado a la cuenta de capitalización individual por cesantía del trabajador y lo que le corresponde legalmente a título de indemnización por años de servicio. Ello desde que la ley es la que se encarga de permitir y reglar la referida imputación sin realizar distingos anticipados entorno a si la causal fue esgrimida por el empleador o declarada judicialmente. Razón por la cual no se ordenará el pago de lo descontado por el empleador a la indemnización por años de servicio, al ser este descuento plenamente procedente y legal.

VIGESIMO QUINTO: Que habiéndose establecido en el considerando décimo séptimo, que la remuneración del trabajador para efecto de las indemnizaciones procedentes debía ser la suma de \$1.800.845 pesos, no existen diferencias a favor del trabajador entre lo efectivamente recibido al momento de firmar el finiquito, a título de indemnización por mes de aviso previo, indemnización por años de servicio y feriado legal, que benefician al trabajador, debiendo rechazarse la demanda a este respecto.

VIGESIMO SEXTO: Que en cuanto a la demanda erigida en contra del Banco Santander Chile como responsable solidario o subsidiario, se dirá que la supuesta prestación de servicios de Santander Gestión de Recaudación y Cobranzas Limitadas para aquella, no pasó de ser una alegación del libelo que no pudo ser comprobada por medio de convicción alguno, ya que ninguna probanza se allegó sobre el punto, pese a que el Tribunal en el numeral 5 de sus hechos controvertidos impuso a los litigantes la carga de probar la alegación. En consecuencia, al no haberse incorporado legalmente prueba alguna sobre el hecho establecido, no puede sino acogerse la alegación de falta de legitimación pasiva y darse por sentado que el Banco Santander Chile fue indebidamente demandado en los presentes autos, no siendo responsable por pago alguno al actor.

VIGESIMO SEPTIMO: Que las pruebas rendidas fueron apreciadas de conformidad con lo prescrito en el artículo 456 del Código del Trabajo y las que no fueron objeto de un análisis explícito en nada alteran las conclusiones a las que arribó el Tribunal.

Y visto, además lo dispuesto en los artículos 161 y siguientes, 425 y siguientes del Código del Trabajo y artículo 13 de la ley 19.728, se resuelve:



I.- Que se acoge parcialmente la demanda de despido improcedente interpuesta por don Rodolfo Eduardo Manríquez Muñoz Arroyo en contra de Santander Gestión de Recaudación y Cobranzas limitada, y se le condena únicamente al pago de \$5.942.789 pesos por concepto de recargo del 30% por ciento por improcedente aplicación de la causal de despido del artículo 161 del Código del Trabajo.

II. Que no se condena en costas a la parte demandada por no haber resultado totalmente vencida.

III. Que las sumas ordenadas pagar devengarán los intereses y reajustes contemplados en los artículos 63 y 163 del Código del Trabajo.

III. Que se absuelve totalmente a la demandada solidaria Banco Santander Chile de la demanda deducida en su contra.

RIT O-137-2021
RUC 21- 4-0338815-4

Proveyó don(a) BERNARDITA MARIA PALOMINOS REYES, Juez Suplente del Juzgado de Letras del Trabajo de Los Angeles.

En Los Angeles a veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

